

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO
DEMANDADO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP
RADICADO	05001-31-05-006-2013-00801-02
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Aclara, Modifica y Confirma.

Medellín, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en concordancia con los Acuerdos expedidos por Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión

Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir la decisión de segunda instancia dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO** contra la **NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL** y **OTRO**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 036**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad el día 11 de diciembre de 2020, el cual liquidó e impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que el señor **JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO** solicitó judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional, junto con la indemnización moratoria prevista en el art. 1º del Decreto 797 de 1949, o en su defecto la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

En sentencia del 21 de noviembre de 2014, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a las codemandadas de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por el actor,

a quien le fueron impuestas las costas procesales de la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$750.000, a favor de cada una de las entidades codemandadas.

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por el apoderado judicial del demandante, habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 25 de agosto de 2015, mediante la cual se confirmó la absolución impartida por la juez *A Quo*, y se impusieron las costas de la segunda instancia al demandante, fijándole como agencias en derecho la suma de \$100.000.

En desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, el apoderado judicial de la parte demandada presentó recurso extraordinario de casación, para ser conocido por la Sala de Descongestión N° 3 adscrita a la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, alta corporación judicial que, mediante providencia del 15 de abril de 2020 (SL1407-2020), dispuso CASAR la sentencia de segunda instancia, y en sede de instancia, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 21 de noviembre de 2014 y en su lugar, CONDENAR a las accionadas a reconocer y pagar a Jairo Antonio Quintero Tamayo, la pensión de jubilación convencional a partir del 1 de octubre de 2010, en cuantía inicial de \$1’708.143,00, junto con las mesadas adicionales, la cual deberá reajustarse de conformidad con la ley. El valor de la mesada para el 2020 corresponde a \$2’490.804,86.

SEGUNDO: CONDENAR a las accionadas al pago del retroactivo pensional por valor de \$272’228.430,07 calculado a 31 de marzo de 2020, cantidad que deberá ser debidamente indexada a la fecha del pago, de conformidad con la fórmula indicada en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada.”

Y en materia de costas procesales dispuso lo siguiente: “...*Las costas en las instancias serán a cargo de las accionadas...*”

En cumplimiento a lo resuelto por el superior, este tribunal de distrito judicial, mediante auto del 6 de octubre de 2020, liquidó las agencias en derecho en segunda instancia a cargo de las entidades accionadas, imponiéndoles a cada una de ellas la suma de ½ SMLMV para el año 2020.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA

Una vez surtido el recurso extraordinario de casación devuelto el expediente al juzgado de origen, la *A Quo* mediante auto del 11 de diciembre de 2020, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- Agencias en Derecho en 1ª Instancia a favor del señor JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO la suma de **\$20.000.000** que deberá ser dividida entre las accionadas.
- Agencias en Derecho en 2ª Instancia a favor del señor JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO la suma de **\$438.902** para cada una de las accionadas.

TOTAL a pagar: \$20.438.902.

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte de la *A Quo*.

El apoderado judicial de la parte demandante **recurrió en apelación** el valor liquidado por concepto de costas procesales.

La juez de primera instancia, mediante auto del 23 de febrero de 2021, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo, al estimarlo procedente.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales, argumentando que debe aumentarse el valor fijado por concepto de agencias en derecho en la primera instancia, pues esta suma de \$20.000.000 no está acorde a los criterios establecidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 3° del Acuerdo 1887 de 2003, relativos a la naturaleza, calidad de la gestión ejecutada por el apoderado judicial, duración útil de la gestión efectuada por el apoderado, y la cuantía de la pretensión.

Y si bien las agencias en derecho se liquidaron con fundamento en el art. 6° del Acuerdo 1887 de 2003, que permite un máximo de 20 SMLMV, equivalentes a \$17.556.060 para el año 2020, omitió la falladora de instancia fijar las agencias en derecho teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia al desatar el recurso extraordinario de casación, donde se dispuso el pago de un retroactivo pensional por valor de \$297.136.479, suma que daba lugar a que las agencias en derecho fueran liquidadas así:

- Primera instancia: \$74.284.120 equivalente al 25% de la condena.
- Segunda instancia: \$14.856.824 equivalente al 5% de la condena.
- Recurso de Casación: \$17.556.060.
- **Para un total de \$106.697.004.**

Y finalmente señala la alzada, que ni la extinta CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO ni el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, ostentan la condición de demandados en esta proceso, pues al encontrasen liquidadas estas entidades, las obligaciones por ellas contraídas, quedaron a cargo de las otras dos codemandadas esto es, la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, y la UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, frente a quienes se deben liquidar las agencias en derecho.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que

aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4° del CGP).

De otro lado, el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el 2222 de diciembre 10 de 2003, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece como criterios para la fijación de tales emolumentos:

“ART. 3°— Criterios. *El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.*

PAR.- En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”

Seguidamente, en lo que toca con la tasación de las agencias en materia laboral, el mencionado acuerdo prescribe:

“2.1.1 A favor del trabajador:

Única instancia (...)

Primera instancia: *Hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si está, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia.

Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO. *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.*

2.6.2. EXTRAORDINARIOS.

2.6.2.1. Casación. *Hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

CASO CONCRETO

Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –referido en precedencia-, y no la del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de Agosto 2016, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada en el año 2013.

También destaca la Sala, que al tratarse de un proceso ordinario laboral de doble instancia, y resultar la sentencia de la Corte desfavorable para los intereses de las accionadas, a quien se les impuso el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional a partir del 1° de octubre de 2010, la cual es una prestación periódica por excelencia, las agencias en derecho en

ambas instancias debían ser liquidadas siguiendo los lineamientos del párrafo del numeral 2.1.1 del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003, normativa según la cual, *“...si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes...”*.

Y en el presente caso las AGENCIAS EN DERECHO en primera instancia se tasaron en la suma de \$20.000.000, equivalentes a 32.46 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2014 (\$616.000), en que se profirió la sentencia de primer grado, es decir, se encuentra fijada muy por encima de los topes a los que alude el referido párrafo, no obstante, advierte la Sala que al no haber sido objeto de apelación este valor por parte de las accionadas, se mantendrá incólume lo resuelto por la A Quo, para no hacer más gravosa la condición del apelante único, en atención al principio de la *“no reformatio un pejus”*.

Advirtiéndole la Sala que la opción de liquidación de las agencias en derecho, teniendo en cuenta un porcentaje del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, solo es factible, en aquellos procesos donde no se reconozcan prestaciones periódicas.

En cuanto al valor de las agencias en derecho en segunda instancia, fijadas en la suma de $\frac{1}{2}$ SMLMV para el año 2020, a cargo de cada una de las accionadas, la Sala accederá a elevar su valor hasta la suma equivalente a dos (2) salarios mínimo legales mensuales vigentes para el año 2020, esto es, \$1.755.604, pues tal y como ocurrió con las agencias en derecho en primera instancia, estas deben fijarse en salarios mínimos, hasta un tope máximo de 20 SMLMV, dada la naturaleza de la pretensión principal, esto es, una prestación periódica o de tracto sucesivo, misma que

imposibilita una fijación de agencias en derecho basada en un porcentaje de las condenas.

El incremento de esta condena tiene su razón de ser en la naturaleza del asunto (pensión de jubilación convencional), así como en la calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado judicial del demandante, pues como bien se sabe, la sentencia de primer grado, fue absolutoria, y fue necesaria la interposición del recurso de apelación para que este tribunal conociera del asunto, y al haberse confirmado lo resuelto por el juez de primer grado, este profesional el derecho debió agotar el recurso extraordinario de casación, para que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, reconociese el derecho pensional a favor de su representado, viacrucis judicial que se prolongó por varios años, si se tiene en cuenta que la demanda ordinaria laboral, se presentó ante la oficina de apoyo judicial de Medellín el día 6 de junio de 2013, y el edicto mediante el cual se notificó la sentencia de la Corte, data del 19 de junio de 2020, es decir, mas de 7 años de trasegar judicial para lograr el fin propuesto.

Y dado que el administrador de justicia goza de la discrecionalidad necesaria para tasar las agencias en derecho entre los topes permitidos por la Ley, y para ello puede observar, efectivamente, la gestión desplegada por el mandatario judicial, la complejidad del proceso, las excepciones formuladas, el tiempo transcurrido en las instancias, el resultado obtenido, entre otros criterios válidos, de donde fluye con justeza el aumento de las agencias en derecho en segunda instancia, haciendo uso de la discrecionalidad que otorga el mismo Acuerdo 1887 de 2003, para tasarlas.

Y en relación con las agencias en derecho que se reclaman frente al recurso de casación, esta judicatura no accederá a lo solicitado por el recurrente, pues si bien en la sentencia SL1407-del 15 de abril de 2020, la H. Corte Suprema de Justicia, dispuso que: “costas en las instancias serán a cargo de las accionadas”, no puede perderse de vista que la decisión adoptada por la alta corporación judicial, no constituye una tercera instancia, sino la resolución de un recurso extraordinario, y si al resolverse dicho recurso no se impusieron costas a cargo de la parte vencida, mal haría la juez de primer grado en adicionar dicha condena en el auto de liquidación y aprobación de costas procesales desbordando su competencia y suplantando otra autoridad judicial, por el contrario, si la parte recurrente estima que el superior omitió una condena en este sentido, debió haber hecho uso de la formula procesal correspondiente para conjurar tal situación, es decir, presentar una solicitud de adición de la sentencia en los términos del art. 287 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud de la remisión normativa dispuesta en el art. 145 del CPTSS.

No son de recibo en consecuencia, los argumentos del recurrente en punto a que la tasación de las agencias en derecho ha debido ser un porcentaje de la condena principal, aplicando una opción de liquidación no valida en procesos donde se reconocen prestaciones periódicas.

Y finalmente en cuanto a las entidades destinatarias de esta condena en costas, estima Sala que no pueden ser otras distintas que LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, pues así quedó definido durante el

trámite procesal de la primera instancia, como acertadamente lo advierte el recurrente en su alzada, y por ende la imprecisión en la que incurrió la *A Quo* en el auto de fecha 11 de diciembre de 2020, donde enlistó nuevamente a las cuatro entidades anunciadas como parte pasiva en el escrito introductorio, no tiene ninguna trascendencia o relevancia jurídica en la presente litis, pues quienes integran realmente la parte pasiva quedaron definidas desde el auto admisorio de la demanda de fecha 21 de octubre de 2013, y luego en la audiencia prevista en el art. 77 del CPTSS, de fecha 2 de mayo de 2014, durante la etapa de fijación del litigio veamos:

PRIMERO: ADMITIR la demanda ordinaria laboral de primera instancia que formula el señor **JAIRO ANTONIO QUINTERO TAMAYO** contra la **NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, representada legalmente por el doctor **FRANCISCO ESTUPIÑAN HEREDIA**, **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**, representada legalmente por el doctor **JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**, y la **UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL UGPP**, representada por la doctora **GLORIA INES CORTES ARANGO** o por quienes hagan sus veces al momento de la notificación.

LITIGIO
Conforme a lo pretendido, los argumentos aducidos en su momento por el Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia para negar la prestación, entidad que no obstante estar notificada no dio respuesta a la demanda pero que conforme a los argumentos aducidos por la apoderada de la UGPP, es esta última entidad la encargada de asumir las obligaciones que en relación con la extinta Caja de Crédito agrario, industrial y minero tenía a su cargo dicho fondo, y los argumentos de defensa de las entidades aquí vinculadas, lo que se debe determinar es si el demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación establecida convencionalmente por la Caja de crédito agrario, industrial y minero con su sindicato de trabajadores y en caso afirmativo qué entidad está obligada a reconocerla y pagarla, lo que se resolverá en derecho y con prueba documental. Lo resuelto queda notificado en Estrados.

Y finalmente no puede perderse de vista que, en la sentencia de primera instancia de fecha 21 de noviembre de 2014, solamente se decidió frente a las únicas codemandadas esto es, la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP, veamos:

FALLA
<p>Primero: Se absuelve al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP-, como sucesora del Fondo Pasivo de ferrocarriles Nacionales de Colombia de las pretensiones formuladas en su contra por el señor Jairo Antonio Quintero Tamayo.</p>
<p>Segundo: Con las consideraciones expuestas para la decisión quedan atendidas implícitamente las excepciones propuestas por las entidades demandadas.</p>
<p>Tercero: Se condena al señor Quintero Tamayo a pagar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP-, las costas del proceso. Se liquidaran por secretaría una vez en firme la sentencia. Como agencias en derecho se fija la suma de \$750.000, para cada una de las citadas entidades.</p>
<p>Lo resuelto se notifica en ESTRADOS.</p>

Así las cosas, y para todos los efectos, conforme a lo resuelto por la *A Quo* en las citadas providencias, las costas procesales en el presente asunto deben ser asumidas por la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, frente a quienes se fijó el litigio y se resolvió en las instancias.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se modificará el valor de las agencias en derecho en segunda instancia, aclarando igualmente lo relacionado a quienes son las entidades destinatarias de esta condena.

Sin COSTAS en esta actuación.

D E C I S I Ó N

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

R E S U E L V E:

Primero. ACLARAR el auto objeto de apelación de fecha 11 de diciembre de 2020, proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido, que para todos sus efectos la parte pasiva de la litis está integrada por la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: MODIFICAR la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, en cuanto al valor de las agencias en derecho en segunda instancia, las cuales quedaran fijadas en la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020 para cada una de las accionadas, es decir, \$1.755.604 a cargo de la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y \$1.755.604 a cargo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, según lo expuesto en precedencia.

Tercero: CONFIRMAR en todo lo demás el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos.

Cuarto. Sin Costas en esta actuación.

Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N °
129 del **26 de julio de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>